

San Felipe, catorce de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don PEDRO IGNACIO PEÑA SANCHEZ, Abogado, domiciliado en Avenida las Condes N° 11.380, oficina N° 91, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, en calidad de mandatario judicial, de **doña Patricia Lolás Arancibia**, chilena, casada, licenciada en trabajo social, con domicilio en Conjunto Habitacional Terra Noble La Troya 641, Comuna San Felipe, quien deduce demanda en Procedimiento de Aplicación General por Nulidad del Despido, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales Adeudadas, en contra de la ex empleadora de su mandante, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE, cuyo representante legal es don CHRISTIAN BEALS CAMPOS, Alcalde, con domicilio en Salinas N° 1211, Comuna de San Felipe.

Indica que la actora comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia a partir del 1 de abril de 2007 hasta su despido el 31 de diciembre de 2020 a favor de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, mediante múltiples contratos de honorarios, pero que en la realidad eran contratos de trabajo. Que durante todo el tiempo que su representada desempeñó sus servicios a favor de la demandada, trabajó como “Coordinadora” en el Departamento de Deportes, Recreación y Cultura y en la Oficina de Cultura y Recreación, además de realizar otras funciones que no eran propias de su cargo. Cargo evidentemente genérico, no accidental y habitual en la organización jerárquica de la Municipalidad de San Felipe. Durante todo el periodo fue sujeta a jornadas de trabajo claramente establecidas, al poder de mando de sus superiores y, a su vez, al deber de obediencia en el desempeño de sus funciones. Que en efecto, el contrato celebrado con la demandada constituye una abierta infracción a la legislación aplicable, pues corresponde a aquellos denominados “Contrato de Honorarios”. En la especie, corresponde imputarle bajo el principio de la supremacía de la realidad la calidad de una efectiva relación laboral sujeta al vínculo de subordinación y dependencia

Señala que su representada durante todo el tiempo que trabajó a favor de la demandada, esto es más de 13 años y 8 meses, realizó numerosas funciones, y en virtud de éstas, es que se fueron extendiendo sus labores por un extenso periodo. Que la actora prestó servicios como “Coordinadora” en el Departamento



de Deportes, Recreación y Cultura y en la Oficina de Cultura y Recreación, debía: Coordinar creación de talleres culturales, formativos y recreativos; trabajar directamente con clubes deportivos de la comuna; asesorar y gestionar fondos concursales para clubes de la común y lo relativo al deporte y recreación; potenciar el trabajo de organizaciones deportivas de la comuna; coordinar escuelas de fútbol, talleres de danza y artes visuales, gestionar actividades recreativas. Que, asimismo, debía trabajar en la creación de talleres culturales y recreativos para la comuna; supervisar ejecución de dichos talleres; realizar atención de público, resolver consultas, entrega de información, difusión de programas de la oficina, y derivación a otras departamentos en caso que procediera; subir información de los beneficiarios de la Oficina a la página de transparencia; asesorar, acompañar y potenciar a los diferentes grupos culturales para su constitución legal; apoyo en eventos artísticos que se realizaban durante la semana y en fines de semana; organizar y gestionar festivales y diferentes celebraciones de la comuna durante el año. Todo lo anterior, sin perjuicio de las funciones ajenas a sus labores regulares; entre otras funciones.

Agrega que conforme lo anterior, y a pesar de las numerosas funciones descritas en los párrafos anteriores, se le contrató bajo la norma del artículo 4 de la Ley N° 18.883. Que sin embargo, las labores prestadas jamás fueron no habituales de la Municipalidad, tampoco se trató de cometidos específicos, ni mucho menos los servicios que prestó a su ex empleadora se pueden catalogar de transitorios y temporales, puesto que como se respaldará la relación con la ex empleadora se llevó a cabo fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, siendo aplicable en este caso la norma común y general en Derecho Laboral, y el Código del Trabajo en toda su extensión. Así pues, lo ha declarado la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en Sentencia de Reemplazo del Recurso de Unificación de Jurisprudencia, Rol 11.584-2014, de fecha 01 de abril del año 2015, caratulado “Juan Pablo Vial con Municipalidad de Santiago” (Considerando Octavo).

Explica que el día 31 de diciembre del año 2020, la Municipalidad de San Felipe separó a su representada de manera irregular y, a su vez, como se acreditará en la etapa procesal correspondiente, faltando a todo requisito legal. Que en efecto, no señaló con exactitud y claridad los hechos ni las causales por el



cual dio término a la relación laboral; no indicó ninguna causal legal de las contenidas en el Código del Trabajo, infringiendo flagrantemente el artículo 162 inciso primero del citado cuerpo legal; tampoco acreditó los pagos previsionales de todo el período de la relación laboral; entre otras irregularidades. Que el 30 de diciembre de 2020, mediante una llamada desde Recursos Humanos del Municipio, fue citada a una reunión con el jefe del Departamento, don Aldo Pérez Molina. En dicha reunión, el Sr Pérez le entrega un documento indicándole al efecto que no seguiría prestando servicios para el año 2021.

Relata que la empleadora consideró de forma unilateral las condiciones del contrato y en definitiva no reconoció que en la práctica y más allá de lo que señalen los documentos, que la relación entre la mandante y el municipio constituyó un contrato de trabajo y, por ende, se alejaron claramente de lo que contempla un contrato de honorarios.

Reitera las labores que presto la actora, sin perjuicio de las funciones ajenas a sus labores regulares; entre otras funciones, implica un cargo que figuró como habitual de la institución, y que conforme a ello no pudo adoptar la forma de un contrato de arrendamiento de obra material ni de servicios. Que la mandante prestó servicios a favor de la Municipalidad de San Felipe durante 13 años y 8 meses, de forma constante, sujeto a una jornada de trabajo. Que durante todo el periodo por el cual se extendió la relación laboral, la mandante fue objeto de instrucciones por parte de su ex Jefe Directo Maria Teresa Moreno y Pablo Silva Núñez (como sucesivos directores de la Dirección Desarrollo Comunitario) estando sujeto en todo momento a la observancia de estos, tanto al inicio como al término del turno de trabajo, y ejecutando en la práctica una serie de labores que tuvieron su origen en el poder de mando de su empleador y en las funciones que se consignan en los contratos celebrados.

Agrega que con ocasión de la jefatura, debía realizar funciones ajenas a su contrato. Por ejemplo, tuvo que estar a cargo de constituir legalmente a una serie de organizaciones comunitarias (juntas de vecinos, centros de madre, clubes sociales, etc.). Asimismo, debía apoyar al departamento en cuanto ocurrían emergencias (apoyo en labores de emergencia) en términos logísticos, informes sociales, etc. De hecho, en la pandemia del año 2020 le correspondió dar apoyo en el ámbito social, desde atención telefónica como vía presencial, hacer informes



sociales y hacer entrega de cajas de alimentos. Que, estas instrucciones se verificaban por correo electrónico, teléfono celular y direcciones verbales en la misma oficina de la jefatura

Señala que su representada cumplió con una jornada de trabajo que se distribuía de lunes a jueves de 08:30 hasta las 17:30 y los días viernes de 8:30 a las 16:30 horas. Sin embargo, en el año 2020 se retiraba a las 14:30 los días viernes. Que, sin embargo, en la práctica trabajaba fuera de la jornada y también los fines de semana y festivos conforme a los requerimientos de la jefatura. Registraba su entrada y salida de la jornada mediante una planilla de control.

Indica que su representada, cumplía su jornada laboral en las dependencias de la Municipalidad, en el edificio de Chacabuco n° 178 (Sede de la Oficina de Cultura Recreacional) y en Yungay n° 398 (Sede de la Oficina de Cultura Recreacional) todas en comuna de San Felipe. Sin perjuicio de lo anterior, debía también dirigirse a dónde fuera destinado según su jefatura a efectos de realizar sus labores en terreno. Que por otro lado, contaba con todos los insumos necesarios para su gestión administrativa, esto es, oficina, escritorio, computador, silla, artículos de oficina, papelería, impresora, scanner, correo electrónico, credencial, etc., todos suministrados por el Municipio. Asimismo, los contratos reconocen un grupo de beneficios, Feriado legal, Permiso administrativo, Licencias médicas.

En cuanto al contrato, señala que emitió boletas de honorarios a nombre de la Municipalidad de San Felipe, en la práctica recibía la contraprestación directamente de la Dirección de Administración y Finanzas, por montos equivalentes y mensuales durante toda la vigencia de la relación laboral. Además se adjuntaba informe mensual de gestión.

Explica que en la especie, entre la mandante y su ex empleadora existió por 13 años y meses, un vínculo de subordinación y dependencia, circunstancia que se acreditará. Todo esto, conforme a las labores que desempeñaba conforme a su contrato, a las jornadas de trabajo de las que fue objeto, las órdenes impartidas por sus superiores directos, con la asistencia diaria y extensiva en el tiempo a las dependencias de la Municipalidad y demás lugares en los cuales debía ejercer sus labores fuera de su jornada laboral, y sumado a todo lo anterior las constantes vigilancias de las que fue objeto en la prestación de sus labores.



Manifiesta que la remuneración de su representada al momento de ser despedido, era por un monto de \$943.860.- pesos mensuales.

Argumenta que la demandada no pudo estar en condiciones de dar cumplimiento íntegro y completo a la obligación que imperativamente le impone el inciso 5° del artículo 162° del Código del Trabajo, esto es, que: "Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el íntegro de dichas cotizaciones previsionales del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo". Que, asimismo, la demandada hizo caso omiso de lo preceptuado en el inciso 6° del artículo 162° del Código del Trabajo, que señala: "Con todo, el empleador podrá convalidar el despido mediante pago de las imposiciones morosas del trabajador, lo que comunicará a este mediante carta certificada acompañada de la documentación emitida por las instituciones previsionales correspondientes, en que conste la recepción de dicho pago".

Expone que se le adeuda a la actora cotizaciones de seguridad social correspondientes a Fondo de Pensiones, Fondo de Salud y del Fondo de Cesantía, por todo el período trabajado entre el día 1 de abril 2007 hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que corresponde que sea declarada la deuda de dichas cotizaciones y condenar a su pago, para lo cual se debe ordenar oficiar a las entidades previsionales respectivas a objeto que inicien los trámites de cobranza judicial. Que procede aplicar la sanción de nulidad del despido a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, puesto que actualmente se encuentra en mora de pagar las cotizaciones previsionales por lo que es merecedora de tal sanción. Así lo ha señalado la propia Excelentísima Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades. A modo de ejemplo cita el reciente fallo que acogió un Recurso de Unificación de Jurisprudencia, Rol 45.842-2016, de fecha 07 de diciembre del año 2016, caratulado "Farfán con Ilustre Municipalidad de Maipú" (Considerando Décimo Sexto).

Refiere a la continuidad de las labores, que su declaración una de las peticiones concretas sometidos a conocimiento del tribunal. Que el elemento de la



continuidad es de aquellos que permite a ésta parte poder comprobar que las supuestas contrataciones a honorarios no eran tales, puesto que éste elemento de continuidad de labores en el tiempo, se opone a uno de los aspectos que configura el contrato de honorarios que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, puesto que la continuidad es absolutamente contraria al aspecto temporal y específico que admite este tipo de contrataciones.

En cuanto al derecho, señala que la Constitución Política de la República consagra en sus artículos sexto y séptimo el denominado "Principio de Juricidad", piedra angular del Estado de Derecho. Que existe una norma de rango constitucional que es la ya citada precedentemente, la cual ordena a todos los poderes y órganos del estado a actuar dentro del ámbito legal de sus funciones, y sólo en la forma que la ley prescriba. Que en efecto, si se considera el artículo 4° de la Ley N° 18.883, se puede observar que dicha normativa, por la cual se faculta a los municipios a contratar bajo la modalidad de honorarios, permite este tipo de contratación sólo para aquellos casos en los cuales deban realizarse labores accidentales y que no sean habituales de los municipios, además exige la referida norma que la prestación de éstos servicios sea sólo para cometidos específicos. Que, en consecuencia, existe una norma de rango constitucional que ordena a los organismos del estado a actuar conforme al principio de juricidad, sometiéndose al marco legal establecido en la misma, circunstancia que en la especie no ha ocurrido, pues como se podrá verificar en la etapa procesal correspondiente, la prestación de servicios, efectuada por su representada, no se llevó a cabo dentro del marco legal que establece el artículo 4° de la Ley N° 18.883.

Indica que el artículo Primero del Código del Trabajo, establece que las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por dicho cuerpo legal, además se aplicarán sus leyes complementarias, por lo que en el inciso primero de este artículo se fijó por el legislador el ámbito de aplicación general del Código del Trabajo, a aquellas relaciones que se susciten entre empleadores y trabajadores.

Reitera que la contratación no se ajustó al ámbito de aplicación del artículo 4° de la Ley N° 18.883, y, que tampoco fue contratado bajo el régimen de planta, contrata o suplente, que cabe preguntarse entonces cual es el régimen legal aplicable a los servicios prestados a favor de la demandada. Que la respuesta se



encuentra en el inciso tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, que es del siguiente tenor: "Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente, se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos".

Cita jurisprudencia aplicable: Fallo de Unificación de Jurisprudencia, con fecha 01 de Abril de 2015, en causa Rol N° 11.584-2014, Fallo de Unificación de Jurisprudencia, Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N° 31160-2016, con fecha 10 de Noviembre de 2016; Fallo de Unificación de Jurisprudencia, Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N° 5699-2015, de fecha 19 de Abril de 2016; Fallo de Unificación de Jurisprudencia, Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol N° 7091-2015 de fecha 28 de Abril de 2016, entre otros.

Agrega que junto con la reciente jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema respecto de la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en relación con el artículo 4° de la Ley N° 18.883, se ha instaurado en los Tribunales Superiores de Justicia, para este tipo de casos, que el Derecho del Trabajo se caracteriza por la existencia de normas heterónomas, establecidas imperativamente por la autoridad, de derecho mínimo inderogable y de naturaleza indisponible, que se imponen sobre la voluntad de las partes y que se aplican de manera necesaria y directa al contrato laboral. En ese sentido la indisponibilidad significa que el trabajador no puede renunciar válidamente a los derechos que la norma establece en su favor, pues estos forman parte del contrato e ingresan a su patrimonio, y en esa lógica, corresponde a los tribunales garantizar su efectivo cumplimiento.

Recalca, en este ámbito, que los contratos de trabajos individuales y los convenios colectivos deben estar siempre subordinados a la ley y no pueden contener cláusulas de índole inferior a las que la propia ley considere mínimos, y bajo ningún respecto pueden establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables a las disposiciones legales y a los convenios colectivos suscritos con anterioridad.

Expone que el Principio de la Irrenunciabilidad puede ser definido como, la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más prerrogativas conferidas por el derecho del Trabajo en beneficio propio. Que este postulado se



encuentra establecido expresamente en el ordenamiento laboral, así, el Código del Trabajo en su artículo 5° inciso 2, señala de forma inequívoca que “los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo”.

En cuanto a la teoría de los Actos Propios en materia laboral. Señala que como posiblemente propondrá la demandada, en razón de aplicar la Teoría de los Actos Propios en contra de su representada como manifestación del Principio general de Buena Fe, es necesario tener en consideración inciso 2° del artículo 5° del Código Laboral: "Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo". Que, en efecto, la calificación de laboralidad de un contrato es un derecho irrenunciable por excelencia. Si se cumplen los requisitos para que una vinculación sea considerada como laboral, esa calificación debe preferirse siempre, cualquiera que sea la denominación que le hayan asignado las partes, justamente porque está involucrado un derecho indisponible. (SIERRA, Alfredo. "La Teoría de los Actos Propios en el Ámbito Laboral". En: Cuadernos de Extensión Jurídica, Universidad de Los Andes N° 18, 2010, pp. 141 y ss.). Lo contrario, supondría aceptar que el Derecho tolera que un acuerdo de voluntades viole o infrinja la ley.

Por lo expuesto y normas que cita, pide se declare la relación laboral, la continuidad de ésta, la nulidad del despido, que su representada fue víctima de despido injustificado, y que, por ende, se le adeudan las prestaciones indicadas en su demanda que son las siguientes:

1. Existencia de relación laboral.

En virtud de la calificación jurídica de la relación laboral expuesta precedentemente entre las partes, solicita se declare que entre la demandada y su representada existió relación laboral entre el día 1 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2020 bajo las características que se derivan de la definición de contrato de trabajo consignada en el artículo 7° del Código del Trabajo.

2. Continuidad de los servicios.

En virtud de lo expuesto solicita se declare la continuidad de los servicios prestados por la mandante a favor de la Ilustre Municipalidad de San Felipe desde el 1 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2020.

3. Indemnizaciones adeudadas.



Con motivo del despido injustificado del que fue víctima su representada, la demandada adeuda los siguientes conceptos que se señalan:

- a. En virtud del inciso 4° del artículo 162° del Código del Trabajo, la sustitutiva de aviso previo por la siguiente cantidad: \$ 943.860.- pesos.
- b. En virtud del inciso 2° del artículo 163 del Código del Trabajo, la indemnización por años de servicios correspondientes al máximo legal por \$10.382.460.- pesos.
- c. En virtud de la letra b) del artículo 168° del Código del Trabajo, el recargo del 50% de las indemnizaciones por años de servicio ascendentes a \$5.191.230.- pesos.
4. Feriado legal y proporcional.
 - a. Feriado legal: \$8.840.822.- equivalente a 281 días (13 años)
 - b. Feriado proporcional: \$574.181.- equivalente a 18,25 días. (8 meses y 30 días).
5. Otras prestaciones.

A las sumas por indemnizaciones, sus recargos y feriado legal detalladas precedentemente, cabe agregar las que provienen de:

- A. Cotizaciones de seguridad social durante todo el periodo que duró la relación laboral, según liquidación que practique el Tribunal.
- B. Las que deriven de la aplicación de los incisos 5° y 7° del artículo 162° del Código del Trabajo, denominada “Ley Bustos”, según liquidación a practicar. Todo con reajustes e intereses y costas.

SEGUNDO: Que, la parte demandada, contesta la demanda solicitando el rechazo de la demanda en la forma en que ella ha sido formulada. Niega cada uno de los hechos consignados en la demanda, reconociendo que la actora ingresa a prestar servicios el 1 de abril de 2007.

Señala que la demandante siempre ha prestado servicios bajo contrato de Honorarios, de conformidad a lo establecido en el artículo 4 letra I) del texto refundido de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y el artículo 4 de la ley N° 18.883, que establece el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales y el artículo 3 letra a) de la ley N° 19.886 de Bases de los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.



Reconoce que la demandante se desempeñó como personal en calidad de honorario en la Dirección de Desarrollo Comunitario para desempeñarse en el departamento de Deportes, Recreación y cultura y en la Oficina de Cultura y Recreación de la I. Municipalidad de San Felipe.

Niega la forma de desvinculación acusada, toda vez que la verdadera razón de término de dicho contrato de honorarios es la aplicación de la cláusula séptima, este no fue renovado por la Municipalidad, la que le comunicó a la demandante a través del oficio Ordinario N° 162 de fecha 30 de diciembre de 2020, emitido por el Jefe del Departamento de Recursos Humanos don Aldo Pérez Molina, en que expresamente se comunica a doña Patricia Lolas Arancibia que la Municipalidad no requerirá de los servicios a honorarios con fondos Municipales a contar del 1 de Enero del 2021, y por ende es la no renovación la causal de término de dicho contrato.

Indica que no existe una relación de naturaleza laboral, que en cuanto a los índices de subordinación, se niegan y se contradicen, por cuanto se trata de una persona que prestó servicios bajo el contrato de honorarios, descartando de plano la existencia de un régimen laboral donde prime la subordinación y dependencia del demandante respecto a su representada la I. Municipalidad de San Felipe. Respecto a las remuneraciones y a lo solicitado por la demandante, se niegan y rechazan por improcedentes, toda vez que en el caso de autos no se está ante una relación laboral que obligue a la empleadora Municipalidad de San Felipe a realizar el pago de los conceptos e indemnizaciones laborales pretendidos por la actora.

Explica que en el caso concreto, se está frente a un Contrato de Honorarios propiamente tal, que se trata de un contrato de arrendamiento de servicios inmateriales que el Código Civil regula en el libro IV, Título XXVI, artículo 2006 y siguientes. Que en el caso de esta Municipalidad y lo establecido en el artículo 4 letra I) del texto refundido de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y el artículo 4 de la ley N° 18.883, que establece el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales y el artículo 3 letra a) de la ley N° 19.886 de Bases de los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, se le permite hacer la contratación a honorarios como es el caso de autos.



Rechaza un vínculo de subordinación o dependencia, no existe una remuneración como la define el Código del Trabajo, se trata de una cancelación de un honorario, es decir un estipendio que retribuye el trabajo en alguna disciplina o actividad liberal de manera diversa a la remuneración propia de un contrato de trabajo. Que se debe entender que el tipo de contrato firmado y realizado por la demandante de autos es de Honorarios, que se destaca porque el prestador del servicio, es decir que se trate de un profesional o de un técnico que desarrolla la actividad relacionada con la especialidad que domina, de forma totalmente independiente, indica que no recibe órdenes e instrucciones, su asistencia es esporádica y además no está sujeto al cumplimiento de ninguna clase de horario, pero si se debe destacar que por motivo de la diligencia específica a la que fue contratado se debe presentar y cumplir dicha presentación de forma completa y constante hasta cumplir la diligencia específica y discontinúa por la cual fue contratado bajo el régimen de Honorarios, y la que se prestó efectivamente en las dependencias de la Municipalidad.

Agrega que al ser un contrato de prestación de servicios profesionales regido por las normas del código civil sobre arrendamiento de servicios inmateriales, y en el caso concreto de servicios específicos técnicos o profesionales, y que esta Municipalidad conforme al artículo 4 letra c de la Ley 18.695, está facultada para contratar dichos servicios.

Señala que en atención a lo expuesto, y considerando que la impositividad está condicionada a la existencia de una relación de carácter laboral, esto es, de trabajadores que presten sus servicios en virtud de un contrato de trabajo, debe precisarse que jurídicamente no puede haber inconveniente en contratar a una persona en base a honorarios sin hacer imposiciones. (Manual Ejecutivo Laboral, N° 7, de Enero del año 2014, publicaciones EDIG, página 12).

Fundamenta que se debe entender que el contrato de Honorarios fue dejado sin efecto conforme a las propias atribuciones legales que se le dieron a la Municipalidad reconocidas en el numeral séptimo del contrato de honorarios de fecha 4 de febrero de 2020.

Por lo expuesto y normas legales que cita, pide se tenga por contestada la demanda dentro del plazo legal, solicitando el rechazo declarándose que se acogen las alegaciones y defensa y que se rechaza la demanda, con costas



TERCERO: Que, en audiencia preparatoria, se llamó a las partes a conciliación la que no se produjo, y se fijaron los como hechos a probar:

Hechos a probar:

1. Efectividad de existir un vínculo contractual de carácter laboral entre doña Patricia Lolas Arancibia y la demandada Ilustre Municipalidad de San Felipe, fecha de inicio del mismo, labor desempeñada, lugar de prestación de los servicios, monto de su remuneración y demás condiciones pactadas, en su caso.

2. En su caso, si el despido de que fue objeto la actora es justificado, concurrencia de la causal invocada y cumplimiento de formalidades legales. Hechos y circunstancias.

3. Efectividad de adeudarse a la actora las prestaciones que reclama en su demanda. En la afirmativa, montos adeudados.

4. Si las cotizaciones previsionales de la actora se encuentran pagadas, pertinencia de su pago y periodos por el cual se adeudarían, en su caso.

CUARTO: Que, en la audiencia de juicio, la parte demandante rindió la siguiente prueba:

Documental:

1. Memorándum N° 01, de fecha 09 de enero de 2020.
2. Copia de Boleta de Honorarios, emitido por Patricia Lolas Arancibia con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, números correspondientes 45, 47, 48.
3. Copia de tres páginas de Diario el Trabajo correspondiente a la demandante con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe.
4. Correo electrónico emitido por Relaciones Públicas, para Patricia Lolas, bajo el asunto "Salud Día Trabajadora y Trabajador Social.
5. Copia de Libro de asistencia, firmado por la demandante, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020.
6. Correo electrónico emitido por Patricia Lolas, enviado a Valeria Saldívar Cortés. Bajo el asunto "lo que indica". De fecha 23 de noviembre de 2020.
7. Correo electrónico emitido por Patricia Lolas, enviado a cultura@sanfe.cl. Bajo el asunto "oficina de cultura y recreación". De fecha 21 de abril de 2015.
8. Correo electrónico emitido por Patricia Lolas, enviado a Francisca Alarcón Palacios y otros. Bajo el asunto "lo que indica". De fecha 02 de noviembre de 2020.



9. Ord N° 162, de fecha 30 de diciembre de 2020.
10. Correo electrónico emitido por Valeria Saldívar Cortés, para Patricia Lolas y otros. Bajo el asunto “Planificación y Otros”. De fecha 29 de junio de 2020.
- 11.2 Fotografías a color que da cuenta de la credencial municipal de la demandante, que da cuenta de las funciones realizadas en favor de la Ilustre Municipalidad de San Felipe.
12. Correo electrónico emitido por Valeria Saldívar Cortés, para Patricia Lolas y otros. Bajo el asunto “Acuerdo de Reunión DIDECO”. De fecha 23 de junio de 2020.
13. Permiso Único Colectivo, perteneciente a la demandante, de fecha 24 de julio de 2020.
14. Correo electrónico emitido por Patricia Lolas, enviado a Valeria Saldívar Cortes y otros. Bajo el asunto “lo que indica”. De fecha 23 de noviembre de 2020, a las 11:49 horas.
15. Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 1, 2 y 3, del año 2007.
16. Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, del año 2008.
17. Boleta de honorario de electrónicos suscritos doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 18 a la 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 del año 2009.
18. Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, del año 2010.
19. Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 44, 47 a la 57, 59 del año 2011.
20. Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 60 a la 64, 65 a la 70 del año 2012.



21.Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 71 a la 82 del año 2013.

22.Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 83 a la 85, 87 a la 97 del año 2014.

23.Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 98 a la 113 del año 2015.

24.Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 114, 116 a la 128 del año 2016.

25.Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 129 a la 133, 135 a la 142 del año 2017.

26.Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 143 a la 154 del año 2018.

27.Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 155 a la 165 del año 2019.

28.Boleta de honorario de electrónicos suscritos por doña Patricia Lolas Arancibia, con cargo a la Ilustre Municipalidad de San Felipe, boletas n° 168 a la 177, 179, 180, 181 del año 2020.

Oficios:

1. AFP PROVIDA, Que informa estado de pago de cotizaciones.
2. FONASA, Informa estado de pago de cotizaciones.
3. Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile II S.A., AFC Chile, Informa estado de pago de cotizaciones.

Exhibición documental:

1. Detalles de control de asistencia del demandante, correspondiente a todo el periodo laboral demandado de la demandante. (Cumplida parcial desde diciembre de 2015)



2. Contratos suscritos, correspondiente a todo el periodo demandado, del demandante. (Cumplida parcialmente desde enero de 2016)
3. Decretos o resoluciones de aprobación de los contratos celebrados por el periodo laboral demandado, del demandante, que consten en poder de la demandada (Cumplido parcialmente desde enero 2015)
4. Informe mensuales de actividades del personal con contrato de honorario, realizados por el demandante, y visados por la demandada, durante el periodo laboral demandado la actora. (Cumplido parcialmente desde enero 2016)

La parte demandante solicita se haga efectivo apercibimiento, respecto de los periodos solicitados no exhibidos, en conformidad al art.453 N°5 del Código del Trabajo, parte contraria se opone. Tribunal resolverá en definitiva

Confesional:

1. Aldo Pérez Molina, en representación del demandado de autos.

Testimonial:

1. Paulo Castillo Varas, Rut 12.948.957-K.
2. Daniela Araya Araya, Rut 13.752.584-4.
3. Tania Francisca Hidalgo Aspee, Rut 17.948.859-0.

QUINTO: Que, por su parte, la parte demandada rindió la siguiente prueba:

Documental:

1. Decreto ordinario n° 162 del 30 de diciembre del 2020.
2. Correo electrónico del 31 de diciembre del 2020.
3. Solicitud de permiso días de descanso honorario del 28 de diciembre del 2020.
4. Decreto 1474 del 7 de febrero del 2020.
5. Contrato de honorario de fecha 04 de febrero del 2020.
6. Formulario RH2 del 2020 30 de diciembre del 2019.
7. Decreto n° 8515 del 28 de octubre del 2019.
8. Orden de compra n° 2737-1796-SE19.
9. Contrato de fecha 01 de octubre del 2019.
10. RH2 del 2019 fecha 09 de agosto del 2019.
11. Decreto n° 4865 de fecha 13 de junio del 2019.
12. Orden de compra n° 2737-1107-SE19.
13. Contrato de servicio de fecha 3 de junio del 2019.
14. Memorándum N°242-A de fecha 10 de abril del 2019.



- 15.RH2 DEL 2019 fecha 09 de abril del 2019.
- 16.Decreto alcaldicio N° 1825 de fecha 7 de febrero de 2019.
- 17.Orden de compra n° 2737-350-SE19 de fecha 12 de febrero de 2019.
- 18.Contrato de servicio de fecha 11 de febrero del 2019.
- 19.RH2 del 2018 de fecha 28 de diciembre del 2018.
- 20.Decreto alcaldicio N° 2670 de fecha 26 de enero del 2018.
- 21.Contrato de servicio de fecha 06 de febrero del 2018.
- 22.Orden de compra 2737-136-SE18 de fecha 18 de enero de 2018.
- 23.Decreto alcaldicio N° 404 de fecha 17 de enero del 2018.
- 24.RH2 del 2018 de fecha 02 de enero del 2018.
- 25.Decreto alcaldicio N°9690 de fecha 18 de agosto del2017.
- 26.Decreto N°1691 de fecha 31 de enero del 2017.
- 27.Contrato de servicio del 31 de enero del 2017.
- 28.Orden de compra N° 2737-243-SE17 de fecha 1 de febrero de 2017.
- 29.Decreto alcaldicio N° 771 de fecha 27 de enero del 2017.
- 30.RH2/2017 de fecha 01 de diciembre del 2017.
- 31.Oferta servicio asistencia hecha por la demandante por el periodo de enero a diciembre del 2017.
- 32.Decreto Alcaldicio N° 673 de fecha 22 de enero del 2016.
- 33.Contrato de servicio de fecha 18 de enero del 2016.
- 34.Orden de compra N° 2737-68-SE16 de fecha 18 de enero de 2016.
- 35.Decreto Alcaldicio N° 365 de fecha 15 de enero del 2016.
- 36.Decreto Alcaldicio N° 63 de fecha 08 de enero del 2016.
- 37.RH2/2016 de fecha 18 de diciembre del 2015.
- 38.Memorándum N° 775-A de fecha 21 de diciembre del 2015.
- 39.Decreto Alcaldicio N° 1476 del 11 de marzo del 2015.
- 40.Contrato de Servicio de fecha 04 de marzo del 2015.
- 41.Orden de compra n° 2737-377-SE15 de fecha 4 de marzo de 2015.
- 42.Decreto N° 1421 de fecha 04 de marzo del 2015.

Oficios:

1. Certificado de 23 de abril de 20201, de AFP PROVIDA, que informa lo que indica.
2. A FONASA, informa estado de pago de cotizaciones previsionales de la actora.



3. GO-T-Nº 5689/2021 de 13 de abril de 2021 de AFC CHILE S.A que informa lo que indica sobre pago de cotizaciones.

Confesional:

1.-Patricia Elena Lolas Arancibia, demandante de autos.

SEXTO: Que, procede pronunciarse acerca de si existió en el caso de autos un vínculo laboral contractual al que le resulten aplicables las normas del Código del Trabajo de modo dar lugar a las peticiones formuladas por la actora en su demanda.

Que, en dicho sentido, y como se señalará con mayor detalle en los considerandos siguientes, se ha llegado a la conclusión que se acredita, en el caso de autos, la existencia de una relación laboral, por cuanto existen elementos probatorios suficientes para establecer su existencia.

SEPTIMO: Que, para resolver la controversia referida en el considerando anterior, debe tenerse en consideración lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo. Así, el primero de ellos prescribe que “contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel a pagar por estos servicios una remuneración determinada.

Por su parte, el artículo 8 señala que toda prestación de servicios en los términos del artículo 7 hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

OCTAVO: Que, igualmente, es preciso tener en consideración uno de los principios que sustentan nuestro derecho laboral, esto es, el principio de la primacía de la realidad. Que en razón de lo anterior, se deberá estimar y considerar lo que los hechos demuestran, no obstante que los documentos suscritos entre las partes den cuenta de una situación diversa. En efecto, en virtud de este principio, en material laboral, importa lo que ocurre en la práctica más que lo que las partes hayan pactado en forma más o menos solmene o expresa o lo que luzca en documentos formularios o instrumentos de control. Según nuestra doctrina, la principal manifestación de este criterio se da cuando se trata de disimular a un trabajador subordinado bajo la apariencia de ser un trabajador independiente contratado a honorarios. Esto lleva a los tribunales a



establecer la verdadera naturaleza de la prestación (Fundamentos de Derecho Laboral. Sergio Gamonal Contreras. Año 2008, pag. 121).

NOVENO: Que, por su parte, el artículo 4° de la Ley 18.883 dispone que “Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

DECIMO: Que, así las cosas, se deberán ponderar los elementos allegados al juicio para determinar cómo en la práctica se desarrolló el vínculo contractual entre las partes, apareciendo que en el caso de autos, existen antecedentes que, como se adelantó, permiten concluir la existencia de una relación laboral.

Que, en efecto, consta de autos conforme a los diversos contratos aportados y conforme a las declaraciones testimoniales rendidas en estrados, que la actora ha prestado labores de manera ininterrumpida para la demandada desde el año 2007. Que, en este sentido, declaró don Aldo Pérez en la prueba confesional rendida por la parte demandada, señalando al efecto que la actora ingresa a prestar servicios en el año 2007. Asimismo, señaló que se le indicó a la actora que no se le iba a contratar nuevamente a contar de 2021 que el contrato vencía el 2020. Que, por su parte, don Paulo Castillo indica que la actora trabajaba en el departamento de cultura que ella coordinaba talleres y monitores, que la coordinación se realizaba con Dideco en reuniones, o vía correo, que ellos agendaban todos los lunes reuniones, indica que se daba por parte de Dideco una directriz, que se entregaba cronograma de desarrollo comunitario en el área de cultura por parte del Director. Indica el testigo que la actora, además, debió desarrollar otras funciones, que tuvieron que salir a repartir cajas, confeccionar informes sociales entre otros. Que, por su parte, doña Daniela Araya indica que la



actora era coordinadora de cultura, que don Pablo Silva era su jefatura, que les daba instrucciones de cómo se desarrollaba cada departamento, que se realizaron reuniones, que la actora cumplía horario igual que el resto de los funcionarios, que la actora concurrió a las actividades realizadas en tiempo de pandemia relativo a evaluaciones para asignar beneficio de caja de mercaderías. Que, en el mismo sentido, doña Tania Hidalgo señala que la actora ingresa el año 2007, y concuerda con los demás testigos en cuanto a sus funciones y el horario en que la actora debía desempeñarse, además en cuanto a la realización de reuniones y recepción de instrucciones. Refiere a que se debía dar cuenta a la jefatura de las evaluaciones y estados de avances de lo comprometido, ya sea por correo electrónico o reuniones de coordinación. Que la actora firmaba libro de asistencia.

Que, en cuanto a la obligación de asistencia, esta, además de la prueba testimonial rendida, puede estimarse probada en virtud de la documental exhibida en audiencia de juicio, relativo a la documentación que era entregada para efectos del pago mensual.

Que, por su parte, conforme a los contratos aportados, se aprecia que la actora en el año 2015 suscribe contrato con la demandada como Coordinadora Oficina de cultura y Recreación de la comuna de San Felipe advirtiendo que no se especifican detalladamente las funciones a realizar, acordándose, eso sí, beneficio adicional para viajar e indicándose el procedimiento para el pago y estableciéndose una remuneración de \$805.000.- mensuales.

Que, por su parte, el contrato correspondiente al año 2020 que fue suscrito el 4 de febrero de 2020, da cuenta que es contratada en el objetivo de desarrollar la cultura en San Felipe en todas las manifestaciones a través de programas y proyectos que fomenten la formación, intercambio, integración y difusión de la cultura en el Valle de Aconcagua, describiéndose funciones tales como; apoyar gestiones, organización y supervisión de talleres culturales, atención de público para la entrega de información y difusión de la oferta programática de actividades masivas, organizar horarios de funcionamiento de talleres y uso de salas, gestionar con otros departamentos acciones para el desarrollo de actividades en sectores de la comuna, entre otros. Que así las cosas, se advierte la amplitud de las labores desarrolladas por la actora, y que se extienden aún más en la medida que se puede tener por acreditado conforme a la documental aportada y



testimonial rendida, que colaboraba en actividades ajenas a sus funciones habituales, tales como colaboración en constitución de organizaciones comunitarias y apoyo en confección de informes sociales en el marco de la emergencia sanitaria.

Que, además, se desprende de los contratos aportados, que en el transcurso del tiempo se fueron incorporando y reconociendo a la actora diversos beneficios. Así, en el contrato del año 2020 se reconocen días por defunción, días de permiso a honorarios, descanso anual, compensación por horas de sobre tiempo, capacitación.

Que, todos estos elementos, llevan a concluir que las labores que la actora realizaba eran habituales, permanentes, que cumplió labores de manera ininterrumpida para la demandada, con una jornada laboral previamente determinada y controlada.

Que, además, aparece acreditado conforme a lo señalado por los testigos y en razón de los correos electrónicos que se tienen a la vista, que las labores realizadas eran supervisadas, siguiendo las directrices y lineamientos dados por la superioridad, se advierte que mediante ellos se pedían informes, e informaba la actora su ausencia. En el mismo sentido, se aprecia correo electrónico por el cual justifica a personal a su cargo por no poder contribuir en el reparto de cajas de mercaderías entre otros, todos los cuales dan cuenta que la actora realizaba sus funciones debidamente supervisada. Que, así las cosas, se desprende de la documental aportada y de las declaraciones antes señaladas, que la actora diariamente asistía a prestar servicios para la demandada, en un horario establecido por su empleador y que es el mismo que cumple el restante personal del municipio

Que, por su parte, aparece acreditado que el lugar en que se desempeñaban las funciones y todos los insumos o materiales para cumplirlas, eran proporcionadas por el municipio. En este sentido declara don Paulo Castillo quien indica que todo era municipal, señalado al efecto doña Daniela Araya que todos los insumos se los daba la municipalidad y también la dependencia física donde prestaba servicios.

Que, la circunstancia de deber presentar al municipio, documentación para efectos del pago mensual, no excluye la concurrencia de los elementos propios de



MHFCXZCBDJ

la relación laboral referida, por cuanto los mismos constituían una exigencia necesaria para el pago, y además ellos precisamente dan cuenta del control que el demandado llevaba en la realización de las funciones que la actora desempeñaba, la asistencia obligatoria y necesaria, elementos que eran considerados por el empleador y de los cuales dependía la contraprestación en dinero propia de una relación laboral.

Que, por su parte, los beneficios que se han descrito anteriormente, si bien, no constituyen por si solos elementos para establecer la existencia de una relación laboral, considerados en conjunto con los demás antecedentes allegados al proceso, se puede concluir que sí permiten establecer un vínculo contractual de carácter laboral, por cuánto son beneficios con los que cuentan los demás trabajadores que prestan servicios para la demandada y que denotan una subordinación y dependencia.

DECIMO PRIMERO: Que, así las cosas, en virtud de la prueba rendida apreciada conforme a las reglas de la sana critica, se concluye que el vínculo contractual entre las partes, no puede enmarcarse dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 4 de la Ley 18.883, por cuanto no se aprecia que los servicios prestados por la actora puedan calificarse como accidentales o no habituales o se trate de la comisión de un cometido específico.

Que, por el contrario, puede establecerse, conforme a la prueba rendida, que la prestación de servicios de que dan cuenta los diversos contratos aportados, se desarrolló con los elementos propios de una relación laboral, bajo vínculo de subordinación y dependencia, exigiéndose a la actora el cumplimiento de diversas obligaciones y concediéndosele además diversos derechos y beneficios propios de una relación laboral.

Que, así las cosas, se estima que la labor para la que fue contratada la actora no corresponde a la hipótesis del artículo 4 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, tratándose, por ende, de un contrato que posee naturaleza laboral y pudiendo, en consecuencia, establecerse que de manera ininterrumpida, entre el día 01 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2020, existió vínculo laboral bajo los términos del artículo 7 del Código del Trabajo.

Que, en cuanto a la época de existencia de la relación laboral, ella se acredita en base a lo declarado en forma conteste por los testigos que deponen



por la parte demandante, conforme señala quien concurre como absolvente por la parte demandada don Aldo Pérez, quien indica que la actora prestó servicio desde el 2007 al 2020, conforme a las boletas de honorarios aportadas a estrados por la parte demandante y conforme se desprende del escrito de contestación de la demanda, en cuanto indica que la actora ingresó a prestar servicios con fecha 01 de abril de 2007.

DECIMO SEGUNDO: Que, luego, encontrándose acreditada la existencia de una relación laboral, aparece acreditado que no existe causal invocada legamente para poner término al contrato y aparece acreditado, además, que en el caso de autos, no se han cumplido con las formalidades legales establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo.

Que, en efecto, conforme a la prueba rendida aparece de manifiesto que se pone término al contrato de trabajo de la actora, mediante Ord. 162 de fecha 30 de diciembre de 2020, el cual no contiene causal legal conforme a las normas del Código del Trabajo, apareciendo, además, que esta comunicación fue entregada el día 30 de diciembre para hacerse efectiva el día 01 de enero de 2021.

Que, así las cosas, se procede a acoger la acción de despido injustificado.

DECIMO TERCERO: Que, no se dará lugar al pago de las remuneraciones y demás prestaciones, por convalidación a que refiere el artículo 162 inciso séptimo, ello por cuanto a juicio del tribunal no concurren los supuestos necesarios para hacer aplicable tal sanción. En efecto, no es posible estimar que la demandada se encontrara en mora en el pago de las cotizaciones, cuando a su juicio existía una vinculación que no conllevaba la obligación de pagarlas, apareciendo que tampoco durante el periodo en que la demandante se desempeñó a honorarios se retuvieran de sus remuneraciones pagos por tal concepto.

Que, en este sentido, se han pronunciado nuestros tribunales superiores de justicia pudiendo citarse al efecto los siguiente fallos: Fallo pronunciado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción de fecha 07 de noviembre de 2007 Rol 344-2007; Fallo pronunciado por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol 2145-2009 de fecha 31 de agosto de 2009, Fallo pronunciado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 07 de agosto de 2009 en causa Rol 6178-2008.



Que, de otra parte, conforme se ha señalado por nuestros tribunales superiores de justicia, debe tenerse en consideración que en el caso de autos el empleador es un órgano de la Administración del Estado y el contrato de honorarios al ser suscrito al amparo de un estatuto legal posee en principio presunción de legalidad. Que igualmente se comparte la argumentación en orden a que la sanción resultaría desnaturalizada, en atención a la incapacidad de la demandada de convalidar el despido en el momento que estime pertinente por cuanto requiere de pronunciamiento condenatorio. Que, en este sentido se han pronunciado nuestros tribunales superiores de justicia, pudiendo citarse al efecto la siguiente sentencia en Recurso de unificación de jurisprudencia Rol N°13.367-2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, que en su considerando cuarto señala: “Cuarto: Que, no obstante fluir de los mismos antecedentes la mora previsional respecto del mes de julio y los días trabajados en el mes de agosto de 2018, no procede el castigo que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, pues al ampararse la contratación a honorarios en una fórmula contemplada por la ley, que aunque en los hechos no fue tal, sino una laboral, opera a favor de la parte demandada una razón que la exime de las consecuencias propias de dicha punición, ya que el basamento legal en el cual se celebraron los sucesivos contratos, les otorgaban una presunción de legalidad, debiendo considerarse, además, que en el contexto que se desarrolla el proceso, tal sanción se desnaturaliza, por cuanto los órganos públicos no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio.”

DECIMO CUARTO: Que, para efectos del cálculo de las prestaciones e indemnizaciones que se ordenarán pagar en la presente sentencia y sobre la base de lo establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo, conforme a las boletas de honorarios aportadas a estrados y contrato de fecha 04 de febrero de 2020, se tendrá como remuneración de la actora, la ascendente a la suma de \$943.860.-

DECIMO QUINTO: Que, procede acceder a la indemnización por años de servicio, apareciendo que la prestación de servicios es desde el año 2007, debidamente incrementada en un 50%, al no haberse invocado causal legal para poner término a la relación laboral, según lo prescribe el artículo 168 letra b) del Código del Trabajo.



Que, asimismo, se accederá a la indemnización sustitutiva por falta de aviso previo.

Que, en cuanto al feriado legal y proporcional demandado, debe señalarse que no existe alegación en cuanto a encontrarse prescrito periodo alguno. Que de otra parte, habiéndose acreditado la existencia de la relación laboral, la parte demandada no aportó prueba alguna tendiente a acreditar que la actora hizo uso de los días correspondientes a feriado legal y proporcional demandados. Que, así las cosas, no habiéndose acreditados su uso o su pago, ha de condenarse a dichos rubros demandados, por los montos que se indicarán en lo resolutivo.

DECIMO SEXTO: Que, se ordenará el pago de las cotizaciones previsionales correspondientes al periodo trabajado y las diferencias que en su caso correspondan y determinen los organismos previsionales correspondientes, por los periodos pagados conforme a la Ley 21.133, todo en base a la remuneración que se determina en el considerando décimo cuarto.

DECIMO SEPTIMO: Que, por último, debe señalarse que no se estima pertinente hacer uso del apercibimiento contemplado en el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, por cuanto en principio se trata de una facultad que es privativa del tribunal, que en este caso no aparece justificada en atención a que el tribunal ha logrado formar convicción en base a la prueba oportunamente rendida.

DECIMO OCTAVO: Que, toda la prueba incorporada en este juicio ha sido ponderada conforme a las reglas de la sana crítica y aquella no mencionada expresamente en nada altera lo ya concluido por este Tribunal.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 7 y siguientes, 63, 159 y siguientes, 162 y siguientes, 168, 173, 425, 446, 456 y siguientes, 459 y siguientes del Código del Trabajo, Ley 18.883 y demás normativa legal pertinente, se declara:

I.- Que **SE ACOGE** la demanda interpuesta por don Pedro Peña Sánchez, abogado, en representación de doña **Patricia Lolas Arancibia**, en contra de la **I. MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE**, representada por don Christian Beals Campos, todos ya individualizados, en cuanto se declara la existencia de una relación laboral ininterrumpida entre las partes, entre el día 01 de abril de 2007 y el 31 de diciembre de 2020. Que se declara, además, que el despido de que fue objeto la actora es carente de causa legal por tanto injustificado, por lo cual se



condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones e indemnizaciones, **rechazándose en lo demás solicitado.**

a. La suma **\$943.860.- (novecientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta pesos)** por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo.

b. La suma de **\$15.573.690.- (quince millones quinientos setenta y tres mil seiscientos noventa pesos)** por concepto de indemnización por años de servicio, ya incrementada.

c.- La suma de **\$8.840.822.- (ocho millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veintidós pesos)** por concepto de feriado legal

d.- La suma de **\$574.181.- (quinientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y un pesos)** por concepto de feriado proporcional.

II.- Que las cantidades ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses, que se indican en los artículos 63 y 73 del Código del Trabajo, según corresponda.

III. Que la demandada deberá enterar en las instituciones de seguridad social en que se encuentra afiliada la actora las cotizaciones previsionales y de seguridad social que se encuentren adeudadas conforme a lo señalado en el considerando décimo sexto, por el periodo trabajado en base a la remuneración señalada en el considerando décimo cuarto.

IV. Que las sumas ordenadas pagar en el resuelvo anterior, se reajustarán y devengarán intereses penales en la forma dispuesta en el artículo 22 de la Ley 17.322 y artículo 17 en relación con el 11 de la Ley 19.728, y 19 del Decreto Ley 3.500, según corresponda.

V. Notifíquese a las instituciones de seguridad social a las que se encuentra afiliada la demandante en su oportunidad, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 461 del Código del Trabajo.

VI. Que no se condena en costas a la parte demandada por no resultar totalmente vencida.

VII. Devuélvase a los intervinientes la documental que en su caso, se encuentre custodiada, debiendo retirarla en el plazo de 3 meses desde que este fallo quede ejecutoriado bajo apercibimiento de destrucción.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.



RIT O-26-2021
RUC 21- 4-0319603-4

Dictada por **doña MARIA ARACELY MUÑOZ PASTRAN**, Juez Titular
del Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe.

En San Felipe a catorce de junio de dos mil veintiuno, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.

.-



MHFCXZCBDJ

A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>